

## Entrevista

### **“Tenemos una visión bastante autoritaria del Estado” Entrevista con Jeannette Aguilar**

Marchelly Funes y Silvia Gutiérrez\*

En esta entrevista, Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, aborda los ejes más significativos de la opinión pública salvadoreña en 2007. Así, reflexiona sobre la situación económica y social, el deterioro de la institucionalidad, las reformas electorales, la necesidad de la inversión social, y los desafíos que el Gobierno deberá enfrentar en 2008.

### **Desde la opinión pública, ¿cómo cerró 2007?**

Quisiera puntualizar varios aspectos donde se destacan cambios relevantes para el análisis de la opinión pública salvadoreña. El primero está relacionado con el predominio decisivo del tema económico en las preocupaciones de la gente; esto no es nuevo porque viene despuntando como uno de los principales problemas en los últimos años. La población percibió, en el transcurso de 2007, que la economía familiar y la economía nacional han empeorado, y que su deterioro se ha agudizado. Lo anterior no significa que el tema de la seguridad haya mejorado en el transcurso del año, sino que el peso de los temas económicos ha sido tan grande, tan fuerte, tan intenso que ha desplazado automáticamente a un segundo plano las preocupaciones ciudadanas respecto al tema del crimen y seguridad. Luego, otro aspecto que se destaca es el enorme descontento, desencanto y malestar de la gente respecto a la gestión gubernamental. Un importante porcentaje de la población considera que, en realidad, el Gobierno no está cumpliendo su promesa de mejorar la situación del país, sobre todo en las áreas sociales, en la economía y en el área de seguridad. Al respecto, hay una evaluación bastante desfavorable de las grandes apuestas en materia económica y en materia social. Esto se refleja de alguna manera y también se traduce en un deterioro de la imagen presidencial, que se cristaliza en una tendencia a la baja en la nota promedio asignada al desempeño del presidente Antonio Saca.

\* Analistas del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), UCA. Las entrevistadoras agradecen a Cecibel Montano por su apoyo en la transcripción del presente texto.

Un ejemplo del incumplimiento de esta promesa es que la población enfatiza el fracaso de medidas como el Tratado de Libre Comercio, la cual ha sido una apuesta fundamental en términos macroeconómicos del gobierno actual. En ese sentido, hay un porcentaje más alto de ciudadanos y ciudadanas que señalan que los TLC son inefectivos para reducir la pobreza en nuestro país. Durante el último año, se ha incrementado el porcentaje de gente que cree que esta medida no está generando mayores resultados. Este aspecto es interesante destacarlo porque, además de que la gente señala que va a generar mayor pobreza, hay un mayor porcentaje de ciudadanos que piensan que les va a perjudicar. Entonces, aparte de considerarla inefectiva para el combate a la pobreza, la consideran adversa y perjudicial para la situación económica del país.

Por otra parte, la población valora cada vez más críticamente la efectividad de medidas como la Red Solidaria, que también ha sido un eje fundamental, un programa importante en lo social, del actual gobierno. Se ha incrementado el porcentaje de gente que señala que esta medida no ayudará a reducir la pobreza en el país. Pareciera ser que el discurso gubernamental, con su énfasis en lo social, y la retórica oficial, que destaca una serie de esfuerzos para reducir la pobreza, no están siendo percibidos por la gente. Cada vez hay más ciudadanos convencidos de que Red Solidaria es parte de la campaña propagandística del Gobierno. Es así como se percibe una mayor capacidad crítica de la gente respecto a la presunta efectividad de las medidas. En este contexto es que se marca más profundamente la tendencia sostenida a la baja en la nota promedio asignada a la gestión del presidente Saca. Esta tendencia estaba presente, prácticamente, desde que comenzó su gestión gubernamental; sin embargo, en 2006

**A la luz de la opinión pública, hay una evaluación cada vez más desfavorable en temas como la pobreza, el empleo, la economía nacional y familiar, el aumento del costo de la vida y el aumento de la inflación.**

todavía se seguía valorando favorablemente la gestión de Saca en cuanto a otros indicadores cuantitativos, a pesar de que ya había decaído. No obstante, hacia finales de 2007 obtiene la nota más baja: de una nota inicial de 7.27 cae a 5.57. Con este dato se hace evidente que un mayor porcentaje de gente está convencida de que el presidente Saca está gobernando mal al país.

### **¿Continuará descendiendo la imagen de Saca en 2008 y 2009?**

De acuerdo a la tendencia sostenida, pareciera que, efectivamente, la imagen de Saca va hacia la baja. Sin embargo, recordemos que este tipo de valoraciones pueden fluctuar en función de momentos políticos específicos. Hasta ahora, la campaña propagandística de Arena ha sido asociada, fuertemente, con la imagen de Saca. En este caso, aún falta ver,

por ejemplo, qué papel juega Antonio Saca en el marco de la campaña electoral y cómo esto se puede traducir en una eventual mejora de la evaluación del desempeño gubernamental y en un cambio en la percepción que la ciudadanía tiene de la imagen presidencial. Este tipo de estrategias son coyunturales y en muchos casos están diseñadas para generar réditos electorales, para favorecer al propio partido, para que mejoren la nota de evaluación o el desempeño de la gestión gubernamental de cara a la ciudadanía. Lo anterior sucedió, por ejemplo, con Francisco Flores, luego de haber descendido estrepitosamente en términos de gestión presidencial. A partir de la implementación del Plan Mano Dura, durante el último año de su gobierno, efectivamente se elevó su imagen y mejoró en la evaluación, además de lograr una recuperación importante de las simpatías partidarias hacia Arena en el primer año del plan.

**En el terreno económico, ¿cómo percibe o valora la opinión pública el discurso gubernamental de que la economía nacional está mejorando?**

La opinión pública destaca que su situación económica familiar ha empeorado y que la economía nacional también. Es interesante destacar cómo, hacia finales de 2007, hay un pronóstico desfavorable del rumbo que lleva la situación económica de nuestro país. Prácticamente, el 65.5% de la gente señala que el país estará peor económicamente en 2008. En ese sentido, la gente no logra percibir los logros macroeconómicos o, en general, los logros en materia económica que destaca el Gobierno. A nivel de la economía familiar, esos logros no se reflejan en su situación cotidiana, sino que sucede todo lo contrario: la población insiste en señalar, y cuestionar seriamente, el incremento, por ejemplo, en el costo de la canasta básica. Nueve de cada diez personas dicen que la canasta básica se incrementó mucho. Casi el 70% de la gente señala que la pobreza aumentó en 2007. Es decir, hay una creciente insatisfacción y descontento por la manera en que se están conduciendo las políticas económicas del país. De hecho, la gran mayoría de la gente está descontenta con la política económica implementada por el gobierno.

**¿Cuáles son los principales indicadores de que la gente no está de acuerdo con la implementación del modelo económico actual?**

A la luz de la opinión pública, hay una evaluación cada vez más desfavorable en temas como la pobreza, el empleo, la economía nacional y familiar, el aumento del costo de la vida y el aumento de la inflación. Sin embargo, hace cuatro años, cuando se empezó a sondear este tema entre la ciudadanía, había mayores expectativas de la gente respecto a la posible efectividad de medidas para combatir la pobreza en el país; ahora hay cada vez mayor desencanto al respecto. En los últimos tres años se incrementó el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que cree que la

pobreza aumentó. En 2004, el 49.3% de la gente consideraba que la pobreza había aumentado; hacia finales de 2007 ese porcentaje fue del 67.9%. Es decir, hay un incremento del 18.6% de personas que percibe una profundización de la pobreza en nuestro país. De igual manera, la población también señala con mayor énfasis que la economía empeoró durante 2007. Si nos ubicamos en un mismo período de comparación, concretamente en el último trimestre del año, en 2004 el 41.2% de la población señalaba que la economía nacional había empeorado; este porcentaje subió a 63.5% hacia finales de 2007. Eso quiere decir que un 22.3% más de ciudadanos y ciudadanas opina que la economía empeoró. Además, hay un porcentaje cada vez mayor de personas que coinciden en hacer un pronóstico más desfavorable de la situación familiar: 65.5% de la gente señala que el país estará peor económicamente, a diferencia de 2004, cuando la cantidad era del 37.7%.

Asimismo, cuando se pregunta sobre las medidas paliativas para mejorar la situación económica, como por ejemplo el aumento al salario mínimo, prácticamente el 74.1% de la gente dice que en nada o poco mejorará la economía de las familias. La población no percibe que esta medida vaya a mejorar su capacidad adquisitiva, sino todo lo contrario. Esto refleja, de alguna manera, que en la práctica los ciudadanos y ciudadanas la perciben como una medida propagandística, orientada a mejorar la imagen del Gobierno en una situación de descontento social que se profundiza cada vez más. En fin, la población manifiesta su inconformidad con el nivel de efectividad de esas medidas. Por ejemplo, la población destaca que, en el tema de la gasolina, el Gobierno no ha hecho lo necesario para evitar el alza en los precios y reclama una mayor intervención del Estado en la regulación del mercado de combustibles. En la misma línea, la población se ha mostrado sensible a la reducción de su capacidad adquisitiva. Una amplia mayoría ha insistido en que, en 2007, el costo de la canasta básica aumentó.

**Para cerrar con el área económica, ¿cuáles serían los grandes vacíos de la gestión de Saca en 2007 y cuáles podrían ser los desafíos con los que tendrá que habérselas en lo que resta de su gestión?**

Uno de los principales fracasos que la gente señala, por ejemplo en la encuesta de evaluación de tercer año de gobierno, es que no ha mejorado los niveles de empleo, lo cual le ha impedido mejorar la situación económica de las familias. Y eso se plantea como uno de los principales retos para lo que queda de su gestión al frente del Ejecutivo. Así, una de las principales tareas del Gobierno para 2008 es que, además de combatir la delincuencia, se trabaje en la creación de fuentes de trabajo, lo cual incidirá en la disminución de la pobreza. Para esto es clave, tal como lo revelan las últimas encuestas de 2007, una mayor intervención del Estado en materia de control y regulación de precios.

Además, se debe trabajar por cambiar la valoración de que la gestión gubernamental está favoreciendo principalmente a los grandes grupos económicos del país, a su partido y/o a los empresarios. Cuando se pregunta para quién gobierna el Presidente, es usual que la respuesta de los salvadoreños y salvadoreñas sea que gobierna para los ricos, para los empresarios, para el gobierno mismo. No hay en la opinión pública la valoración de que sea un gobierno incluyente, que incorpore las necesidades de las grandes mayorías. Desde este punto de vista, los principales desafíos en materia económica suponen desarrollar un modelo económico incluyente, que reduzca las inequidades, que incremente la distribución de ingresos, que genere mayores niveles de empleo, no solo de maquila sino empleos dignos, y que se definan políticas económicas orientadas a beneficiar a las grandes mayorías de la población.

**En el ámbito social, ¿sigue siendo la violencia la principal amenaza para la sociedad salvadoreña?**

La situación de violencia y criminalidad, en términos generales, no ha mejorado. No obstante, hacia finales de 2007, el tema de las pandillas no cobra preeminencia como un factor generador de inseguridad en la población. En ese sentido, habría que destacar que en el marco de las medidas gubernamentales para el combate de la delincuencia y la criminalidad, la opinión pública ha venido variando. Ciertamente, el tema de la seguridad se ha posicionado cada vez más, y eso se ha reflejado en un notable incremento del porcentaje de personas que señalan que la delincuencia ha aumentado en el último año. Cuando se les pregunta acerca del discurso del Gobierno, en el que se insiste en que se han reducido los homicidios, el 68.8% de la gente considera que no se han reducido o que siguen igual. Cuando se pregunta qué tan efectivo ha sido el Gobierno para combatir la delincuencia y la criminalidad en el país, un poco más de la mitad de la gente dice que ha sido nada o poco efectivo.

ha sido nada o poco efectivo.

**Las instituciones religiosas tienen mayor credibilidad que los partidos políticos, los empresarios o la Asamblea Legislativa. En general, son la Iglesia católica y las iglesias evangélicas las que siguen capitalizando los mayores niveles de confianza institucional.**

En la percepción del problema de la inseguridad destaca también un aumento en los porcentajes de victimización reportada; es decir, en los últimos tres o cuatro años ha aumentado el

porcentaje de personas que reportan haber sido víctimas de un hecho delincencial de forma directa. De manera que, hacia finales de 2007, el 20% de la población declara haber sido víctima directa de algún hecho de violencia durante el año. Es decir, si consideramos que la población es de 5.8 millones de acuerdo a los últimos datos del censo de población, un poco más de un millón de personas están siendo víctimas de la situación de violencia. Además, la evaluación negativa del desempeño de las instituciones es un indicador de que la ciudadanía está reprobando

la gestión gubernamental en este tema y que demanda mayor seguridad y mayor justicia. Es importante destacar que, en complemento a estas valoraciones, la población señala que una de las principales tareas del Gobierno para lo que queda de su gestión es combatir la delincuencia.

**Aunque la vigencia de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura ya finalizó, las autoridades continúan con iniciativas similares, los denominados “operativos antipandillas”. ¿Percibe la población, de alguna forma, que estos operativos son continuación de los planes anteriores?**

En el contexto de los dos planes señalados, la gente reporta mayores niveles de percepción de inseguridad, contrario a lo que se esperaba que generarán. Es decir, en los primeros meses hay una mejora en la percepción de la situación, pero con el paso del tiempo aumenta la sensación de inseguridad; entonces, no hay una mejora en ese aspecto. En la percepción de la gente no hay una valoración de mejoría de la situación de inseguridad, de violencia y de criminalidad en el país; más bien reclaman al Gobierno una política de seguridad que aborde integralmente estos temas. En términos generales, el Gobierno ha fracasado en el combate y la persecución del delito, pero la Policía Nacional Civil sigue siendo valorada como la instancia más efectiva.

Lo anterior se relaciona con la visibilidad de la PNC como la institución encargada de combatir el delito, ya que es la que siempre aparece en los medios, en operativos, y liderando la persecución y la captura de delinquentes. También en la encuesta de evaluación del año 2007 se pregunta sobre las últimas medidas gubernamentales para el combate de la criminalidad; al respecto, la gente considera que no están siendo efectivas. Al preguntar qué tan positiva ha sido la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia para el combate delincriminal, la gente considera que, pese a su creación, no se han experimentado mejoras en materia de seguridad pública.

**¿Qué se puede decir de la confianza ciudadana en las instituciones? ¿Confía la población en instancias como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil?**

Es interesante ver cómo las instituciones religiosas tienen mayor credibilidad que los partidos políticos, los empresarios o la Asamblea Legislativa. En general, son la Iglesia católica y las iglesias evangélicas las que siguen capitalizando los mayores niveles de confianza institucional, a diferencia de instancias como los partidos políticos o la Asamblea Legislativa, que se ubican en los escaños más bajos de credibilidad ciudadana. Conviene destacar que el primer Órgano del Estado es el que genera menos confianza, cuando se supone que, dada su configuración, es el que representa los intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Estas características no se reflejan en las escalas de confianza institucional; de igual manera, es el caso de los partidos políticos, cuyo descrédito sigue de cerca al de la Asamblea Legislativa.

Para el tema de justicia es importante destacar cómo instituciones como la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia también se ubican entre las peor evaluadas. Esto ha sido una tendencia recurrente en los últimos años, que refleja la poca legitimidad de estas instituciones ante la población. La Fiscalía ha procesado a los responsables de cometer delitos; sin embargo, hay un 61.5% de la población que cree que esta institución no realiza su labor a cabalidad. Más bien hay un enorme grado de desconfianza en ella, y se cuestiona seriamente su capacidad como órgano responsable de la dirección funcional de la investigación criminal. Por su parte, la Policía es una de las entidades del gobierno central que muestra los mayores niveles de confianza y que se ubica, incluso, por encima de instituciones como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Juventud, que usualmente han salido bastante bien evaluadas.

**Si se habla de que las políticas que el Gobierno ha implementado no han sido efectivas, ¿cómo, según la ciudadanía, deberían ser estas políticas?**

Realmente lo que se explora en las encuestas de opinión es, por un lado, cómo valora la población las medidas gubernamentales para el combate de la criminalidad, algunas de carácter coyuntural. Por otra parte, lo que se advierte es que la gente está insatisfecha porque las medidas no responden a la realidad delincencial del país.

Es clara la preocupación en este tema, y se pide mayor vigilancia, mejor desempeño de la Policía, incremento de penas, pero también se señala la necesidad de generar mayores fuentes de empleo que logren contener las probabilidades de participación delincencial de los jóvenes y, en general, de cualquier eventual delincuente. Cuando se pregunta qué debería hacer el Gobierno para combatir la delincuencia, hay personas que le apuestan a medidas como cadena perpetua y, aunque en 2007 no se abordó directamente el tema de la pena de muerte, hay un porcentaje pequeño que considera esta medida. Entonces, tenemos una visión bastante autoritaria del Estado y del rol que este debe jugar en el control de la delincuencia. Esto se relaciona con el pasado autoritario del país, que, de alguna manera, siempre ha marcado la opción por las medidas punitivas entre la ciudadanía.

**¿Hay algún indicador en la opinión pública sobre cómo mejorar la confianza institucional?**

La gente demanda que las instituciones sean más efectivas en el cumplimiento de su misión constitucional, en el cumplimiento de su labor, demanda mayor profesionalismo en el desempeño de sus funciones, es decir, demanda la aplicación de políticas de Estado, de políticas nacionales más coherentes que logren

realmente traducirse en beneficio para la gente. También hace falta construir una institucionalidad más sólida, más transparente; hacen falta instituciones más confiables, más cercanas a las necesidades de la gente. La opinión pública también ve a las instituciones divorciadas de sus propias necesidades, de su realidad, por lo que exige que los que lideran la gestión pública respondan a las necesidades de la mayoría de la gente y no a intereses sectoriales o partidarios; demanda que, en la medida de lo

**Las personas no se tragan el cuento de una gestión que favorece el discurso social, de un presidente que dice que está favoreciendo a los sectores más desposeídos, que ha mejorado la situación de las mujeres, que ha convertido al país en el más seguro.**

posible, estas políticas sean impulsadas justamente pensando en un interés colectivo y no en un interés particular. Esta última petición se debe a que la población percibe que muchas medidas son implementadas para beneficiar a determinados grupos o sectores, y no a las

grandes mayorías. De esa forma, se resalta la necesidad de que el Ejecutivo gobierne para el conjunto de la población, especialmente para sus sectores más vulnerables.

**¿Cómo se percibe la corrupción entre la ciudadanía?**

En términos de percepción, se puede mencionar una utilización inadecuada de los recursos del Estado; hay ciertos funcionarios y sectores del Gobierno que se aprovechan de los recursos estatales para beneficiarse a sí mismos o a determinados intereses. La opinión pública subraya la frecuencia con que los servidores públicos utilizan fondos o recursos para su propio beneficio. Aquí se señalan personas que han sido objeto de un soborno o de una “mordida” para poder agilizar trámites en alcaldías u otras entidades gubernamentales. Los ciudadanos y ciudadanas advierten que la corrupción ha aumentado en el país en los últimos años, y que el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para contener su avance. Por ejemplo, en la encuesta de evaluación del Gobierno de mediados del año, el 62% opinó que la corrupción está algo o muy generaliza-

da. Cuando se preguntó si había aumentado, había disminuido o seguía igual con el actual Gobierno, el 47% dijo que había aumentado. Por lo tanto, hay una valoración de que la corrupción, efectivamente, está afectando la gestión gubernamental y que se traduce en un deterioro económico y moral para el país.

**¿Beneficiará, de alguna forma, la iniciativa Alianza por la Familia la imagen deteriorada que tienen en este momento el presidente Saca y su gabinete?**

Sin duda, está diseñada justamente para eso: mejorar la imagen presidencial, mejorar la aceptación de Arena y, eventualmente, generar mayores simpatías partidarias en el contexto preelectoral. Esto puede, en algún momento, generar algún capital de simpatías partidarias para Arena, aunque no le será tan fácil mejorar su imagen y su grado de aprobación. Lo anterior se debe a que pareciera ser que la gente advierte que estas medidas [de la Alianza por la Familia] son positivas y las ven como algo bueno, pero, en términos generales, no creo que la gente perciba que esto se traduce en una mejora sustancial de su capacidad adquisitiva o de su situación económica. Además, buena parte de las medidas están dirigidas a sectores más urbanos, por lo que en estos se puede generar un leve incremento de la simpatía; sin embargo, esto no va a cambiar sustancialmente la tendencia de descontento y rechazo a la manera en que Arena ha conducido el país.

Por otra parte, no creo que estas medidas logren ser sostenibles. Principalmente, porque no se han visualizado como políticas de Estado, sino como políticas de gobierno bastante transitorias debido a que la mayoría de ellas finaliza su vigencia hacia mediados de 2009, junto con la gestión presidencial. La población salvadoreña advierte que el aumento al salario mínimo es una medida electorera que no va a generar cambios importantes en la situación cotidiana de las familias de menores ingresos.

**Respecto a las promesas que hizo Saca, en su tercer año de gestión, ¿cómo las percibe la opinión pública?**

Los resultados de las encuestas nos indican que cuatro de cada diez ciudadanos dicen que no ha cumplido sus promesas, y una tercera parte dice que solo algunas. En general, se ha reducido a un 23% el número de salvadoreños y salvadoreñas que sostiene que ha cumplido con todas las promesas. Es así como vemos que la gente reclama insistentemente que no se han cumplido sus expectativas en torno a la presente gestión presidencial. Cuando se pregunta qué tanto se ha preocupado el Gobierno por resolver los principales problemas del país, prácticamente el 76% de la gente dice que nada o poco; entonces, si relacionamos este dato con el cumplimiento de promesas, vemos que el Gobierno sale muy mal evaluado.

Al final, las personas no se tragan el cuento de una gestión que favorece el discurso social, de un presidente que dice que está favoreciendo a los sectores más desposeídos, que ha mejorado la situación de las mujeres o de las madres solteras, que ha convertido al país en el más seguro. Como ya se ha dicho, uno de los principales talones de Aquiles en la gestión de Saca ha sido el tema del crimen y la inseguridad, que se ha disparado desproporcionadamente en el país. Nunca en las gestiones gubernamentales tuvimos un incremento de cerca del 50% de homicidios como ha sucedido durante la administración Saca; entonces, pareciera ser que, además de no haber cumplido sus promesas, el presidente Saca ha agravado problemas que ya eran agudos antes de su arribo al Ejecutivo.

**¿Varía esta percepción en los distintos sectores sociales?**

La gente que proviene de los sectores bajos, con menos educación, sobre todo mujeres, valoran más favorablemente la gestión del Gobierno, a diferencia de los sectores más informados, más educados. Las personas del área metropolitana urbana tienen una actitud más crítica para valorar la gestión presidencial; de hecho, si se hace un análisis desagregado

de la nota asignada al Presidente según las características sociodemográficas, ésta cae cuando se trata de personas mejor informadas y más educadas, de nivel educativo superior o de bachillerato. Hay una evaluación diferenciada que tiene que ver con el modo como las personas califican de forma más crítica el discurso y la propaganda gubernamental a partir de sus recursos educativos e informativos, y de la exposición a medios que tienen. Es así como el discurso no cala de igual manera en todos los sectores.

### **En un contexto así, ¿cómo se plantea el panorama para Arena en las próximas elecciones?**

Si analizamos un poco la erosión sostenida de la gestión presidencial, el creciente descontento y el desencanto de la población frente a una gestión ante la cual había muchas expectativas positivas, vemos un panorama bastante difícil para Arena. Las expectativas de cambio, de mejora del país, se contraponen a la situación de grave crisis económica que está agudizando los brotes de malestar y descontento, de desaprobación de las políticas públicas, principalmente en los ámbitos de seguridad y economía. Hasta mediados de 2007, la intención de voto para presidente por Arena capitalizaba el 33.6% de las preferencias; en noviembre baja a 27%. En contraste, el FMLN, que tenía el 26.8% en intención de voto para presidente a mediados del año, sube a 34.5%. Esta tendencia indica que hay una mejoría en la imagen del FMLN *versus* un deterioro de la del partido Arena, que se traduce en un aumento de simpatías partidarias para el partido de izquierda. Además, hay que analizar otros aspectos: es importante destacar que los niveles de abstencionismo son elevados. Cuando se explora la intención de voto, cerca de la tercera parte de los ciudadanos y ciudadanas dice no saber por quién va a votar. Estamos hablando de que alrededor del 30%

de los consultados se muestran indecisos aún en su intención de voto.

### **El temprano lanzamiento de Mauricio Funes como candidato a la presidencia por el FMLN, ¿incidirá en el nombramiento del candidato de Arena?, ¿tendría alguna relación con el repunte del FMLN en la intención de voto?**

Como IUDOP, creemos que no solo el lanzamiento anticipado de la candidatura de Mauricio Funes ha contribuido al repunte del FMLN en las preferencias electorales, sino que convergen varios factores: por un lado, el enorme malestar, pesimismo y descontento general frente a la gestión de Arena; a esto habría que sumarle la valoración negativa de la efectividad de las políticas gubernamentales. La mayoría de la gente está desaprobando la manera en que Arena ha conducido las principales políticas públicas. Adicionalmente, está otro tema que ha venido a converger en este escenario, y es la falta de credibilidad en las instituciones del Estado; y, obviamente, el perfil del candidato del FMLN, el cual es distinto al que tradicionalmente

**La gente sigue apoyando la existencia de los dos grandes partidos y no tiene interés en que se fortalezca una tercera vía. En ese sentido, todo apunta a que vamos a tener una elección extremadamente polarizada.**

hemos tenido en las candidaturas del principal partido de izquierda.

Lo anterior se ubica en un escenario muy adverso para Arena; el desgaste de los veinte años en el Ejecutivo, el fracaso de las políticas públicas y la crisis económica, que ahora está pesando más que nunca, están empujando a amplios sectores de la población a pensar en otra opción política. Obviamente, esto no es automático, sino que está alimentado por dinámicas muy complejas que tienen que ver con la cultura política de la gente. Este contexto favorecerá un escenario de elecciones más competitivas, quizás las más competitivas de la historia reciente del país, luego de la elección del 94. En estos comicios, Arena no lo va a tener fácil; amplios sectores de la población están pujando por un cambio en



el rumbo del país. No se sabe si realmente el FMLN va a responder a esas expectativas. Para ello tiene que formular una propuesta incluyente, concreta, que responda a las necesidades y los problemas de la mayoría, y no depositar todo su capital político en los hombros de Mauricio Funes.

**¿Es posible que la campaña montada por Arena para elegir a su candidato a la presidencia vaya a incidir de alguna manera en la percepción de la ciudadanía y en su intención de voto?**

El proceso interno de Arena se diseña y plantea como uno más abierto, democrático y participativo, de cara a tratar de mantener la unidad del partido y a desalentar los brotes de inconformismo y malestar que existen entre los diferentes grupos de poder. Es para mostrar a la opinión pública, seguidores y simpatizantes que están siendo democráticos en el proceso. Pero en realidad lo que vemos es un *show*, una farsa, un remedo, porque no hay visos de que sea democrático. El proceso también ha puesto en evidencia todas las pugnas internas, las luchas de poder sectorial que se viven al interior de Arena, y está desnudando serios conflictos y fragmentación. También se han puesto en evidencia muchas inconformidades y diferencias. En la competencia todo está definido, controlado, regulado y aprobado por el Coena, no hay participación de las bases, sino únicamente para avalar, finalmente, el candidato de la cúpula. Mientras que la población lo que quiere ver es una figura que, más que simpática, sea capaz de proponer soluciones concretas a los grandes problemas del país.

**Hablando de las elecciones y de la campaña electoral, las dos últimas han sido bastante polarizadas. ¿Cómo se prevé que sea esta campaña? ¿Cabría esperar la misma polarización?**

Los datos de la última encuesta muestran que se está configurando un escenario cada vez más polarizado. De acuerdo a la opinión pública, una tercera vía de centro se puede considerar como una opción que, en algún

momento, pueda despolarizar el espectro político electoral. Sin embargo, la gente sigue apoyando la existencia de los dos grandes partidos y no tiene interés en que se fortalezca una tercera vía. En ese sentido, todo apunta a que vamos a tener una elección extremadamente polarizada, muy violenta, elevadamente confrontativa, que puede generar incluso un mayor abstencionismo y poca confianza en el proceso. El peor resultado de todo ello es que la gente pierda interés en las elecciones y que eso se refleje en una baja participación en los comicios.

En general, la gente muestra bajo interés en el proceso; si a eso le sumamos una campaña electoral que va a ser muy intensa, que va a ocupar prácticamente todos los espacios y medios, pueden generarse niveles de mayor apatía ciudadana. En las elecciones de alcaldes estamos frente a una dinámica bastante distinta; ciertamente, las simpatías partidarias tienen un peso importante, pero el tema del perfil del candidato se sobrepone a la bandera política. Es incierto lo que puede pasar, y preocupa, de manera particular, la forma en que los partidos encaren la situación. En el caso de Arena, generalmente cuando está desesperado y advierte la eventual desventaja partidaria en los resultados, suele desplegar toda su maquinaria electoral, diseña estrategias agresivas que pueden ser muy perniciosas para la gobernabilidad del país.

**Se ha hablado de la posible aprobación de la ley de partidos políticos y de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. De ser aprobadas estas iniciativas, ¿de qué forma afectarían la campaña?**

Cada vez que hay una elección, estos temas salen nuevamente a la discusión pública; grupos como MIRE vuelven a apuntar la necesidad de retomar el tema de las reformas electorales, pero hasta el momento hemos visto nula voluntad política, sobre todo por parte de los principales partidos. Como quiera que sea, esas iniciativas, de ser aprobadas, constituirían un avance importante para transparentar el

proceso electoral, pero también para diseñar un proceso con más contrapesos, porque hasta el momento son los partidos políticos mayoritarios los que controlan esos espacios de poder y eso no ha ayudado al proceso democrático del país. Más bien ha sucedido lo contrario, pues desde las mismas instituciones, inclusive desde el propio ente rector del proceso electoral, se han diseñado estrategias para favorecer tendenciosamente los intereses particulares de determinados partidos.

El tema de una ley de partidos políticos que obligue a los institutos políticos a declarar el origen de sus fondos sería muy positivo para el país, para mostrar de dónde provienen sus recursos financieros, pero también para evitar que grupos de poder, externos o internos, tengan una injerencia directa en los partidos. Esto obligaría a que tengan que utilizar otro tipo de estrategias electorales, donde se demande menos recursos económicos, por ejemplo el contacto ciudadano o la visita directa a comunidades. Lo anterior replantearía toda la dinámica electoral, la estrategia mediática, y, definitivamente, los partidos tendrían que rediseñar sus estrategias electorales. Por otra parte, retomar el tema del voto residencial, que todavía sigue siendo una deuda pendiente en materia de reformas electorales, contribuiría a incrementar la participación ciudadana, acercaría las urnas a las comunidades, sobre todo en aquellos sectores más remotos que no tienen posibilidades de desplazarse, ya que es a ellos a quienes más afectará la decisión de dividir el proceso electoral de 2009 en dos elecciones y, eventualmente, en tres.

**El 43.1% de la población considera que el concepto de democracia no tiene mayor significado. Entonces, ¿cómo se explica que el 72% la apoya como forma de gobierno?**

Esto tiene que ver con la manera en que la gente concibe la democracia. Para una buena

parte de la población salvadoreña, la democracia no tiene sentido, es un concepto vacío, sin significado, porque transitar hacia la democracia no ha supuesto una transformación importante de sus vidas ni un cambio sustancial en el rumbo del país que mejore su calidad de vida, su condición social, las oportunidades de desarrollo para ellos y para sus familias. Entonces, tiene que ver con cómo se conecta el concepto de democracia con la situación actual de los salvadoreños y las salvadoreñas. Las personas no logran hacer la conexión entre democracia y calidad de vida con oportunidades, con futuro mejor; sin embargo, cuando se les pregunta si apoyarían un régimen democrático, lo conciben más bien

**Uno de los principales desafíos para el Estado, en el mediano y largo plazo, es recuperar la legitimidad que ha perdido frente a la población. Esto sólo se puede lograr si tenemos instituciones más fuertes, más transparentes, más honestas.**

como un sistema político que de alguna manera ha logrado determinadas aperturas y que, en contraposición a un sistema autoritario, aseguraría determinados derechos y libertades. Pareciera que hay una contradicción,

pero tiene que ver más con el escaso conocimiento que la gente tiene del tema.

**Para ir concluyendo, ¿cómo se visualiza el escenario para las próximas elecciones en lo político, en lo social y en lo económico?**

En términos políticos, hemos hablado de cómo se han ido desplazando las simpatías partidarias; estas pueden cambiar, ya sea a favor del Frente o pueden, en algún momento, empezar a moverse a favor de Arena. Esto dependerá mucho del candidato que finalmente nombre Arena, de su fórmula presidencial y del tipo de campaña que impulsen los dos principales partidos. Este último aspecto usualmente tiene mucho eco en la gente, tiende a calar en el inconsciente colectivo, en la subjetividad de la gente, y se traduce también en una eventual simpatía partidaria. Arena va a continuar insistiendo en el discurso de lo social, y por este punto tratará de captar la simpatía de los descontentos y de neutralizar el malestar existente, pero es algo que no puede lograr en el corto plazo. En un año, es difícil que las medidas de Alianza por la Familia logren impactar

en la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables. En este tema, la campaña mediática será muy fuerte, pero vemos ahora a una opinión pública más crítica, que cuestiona seriamente la gestión gubernamental y que se muestra descontenta. Sin embargo, también plantea la posibilidad de mover su intención de voto y, en consecuencia, sus preferencias partidarias. Respecto al tema económico, vinculado a lo social, la situación económica del país se irá agudizando, principalmente porque no hay visos de que la crisis del petróleo se estabilice. La constante subida de los precios del crudo, a escala internacional, va a continuar afectando muchísimo la economía mundial y, en este caso, la economía nacional. El incremento de los precios de la canasta básica continuará, ya que este también es un tema que responde a una situación mundial. Éste se traduciría en una mayor erosión en la percepción de la gente sobre Arena. Además, el escenario económico mundial no favorece las posibilidades de que mejore la situación económica del país.

**Desde la perspectiva de la opinión pública, ¿qué desafíos se podrían vislumbrar este año para los tres órganos de Estado?**

Uno de los principales desafíos para el Estado, en el mediano y largo plazo, es recuperar la legitimidad que ha perdido frente a la población. Esto sólo se puede lograr si tenemos instituciones más fuertes, más transparentes, más honestas, más capaces técnicamente y que respondan a los intereses ciudadanos y no a los intereses partidarios. Un segundo desafío sería despartidarizar las instituciones generales, sobre todo instituciones clave como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que han sido feudos de determinados partidos políticos. Si se lograra hacer esto en el mediano plazo, sería un aporte para el fortalecimiento de la institucionalidad del país, que se ha venido erosionando cada vez más. Otro desafío importante es lograr contener el avance delincriminal, que se ha venido agudizando en los últimos años a partir de las debilidades institucionales y de las equivocadas políticas públicas que se han implementado.

Éstas han estado, generalmente, visualizadas desde una óptica electoral y no desde una óptica técnica-estratégica de país.

Si se lograra diseñar una política criminal e integral, que fortaleciera las capacidades técnicas de las instituciones encargadas de aplicar la justicia y garantizara la seguridad ciudadana, podríamos, por lo menos, contener el auge delincriminal de los últimos años. Lo anterior supone hacer reformas importantes en el sistema judicial, las cuales impactarían en importantes entidades de seguridad pública y contribuirían a hacer las evaluaciones pertinentes a la PNC, en orden de replantear el modelo de gestión policial vigente. Se trata de recuperar institucionalidad fiscal, policial y judicial.

Por otra parte, el tema económico supone definir un modelo que dé continuidad, en cierta medida, a aquellos programas que han sido exitosos para mejorar la economía nacional y la economía familiar, pero también definir un modelo más incluyente, más redistributivo. Es decir, que abra posibilidades de inversión a nivel local, pero también oportunidades de trabajo, de desarrollo, de capacitación y de formación. En este caso, el tema de la educación vuelve a ser un factor clave. La inversión social en salud y educación debería ser un eje fundamental del próximo gobierno. El aspecto educativo ha quedado rezagado. No estamos cumpliendo las metas del milenio ni universalizando la educación, sino todo lo contrario: los indicadores en esta materia dan cuenta de que ha habido un retroceso pese al Plan 2021 y a otros avances.

En definitiva, un desafío importante para el país es el tema de la inversión social y, en sintonía con eso, el desarrollo de un modelo económico incluyente, que abra posibilidades de inversión sostenible, de generación de ingresos, y que permita mejorar, a largo plazo, la calidad de vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Dentro de este modelo económico se necesita un rol mucho más activo del Estado en la dinámica del mercado, principalmente en la regulación de precios, ya que, hasta el momento, son las empresas las que definen las reglas del juego. En general, esos serían los desafíos más importantes para 2008 desde la perspectiva de la opinión pública salvadoreña.